

En ejercicio

"Parece que la tercerización laboral sufre de trastorno bipolar"

La intermediación es uno de los temas más debatidos en el Derecho Laboral, pues su indebida utilización, en muchos casos, ha generado resistencia por parte de diversas organizaciones de trabajadores, que la califican como sinónimo de precarización.

Jorge Eliécer Manrique, director del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado, cree que es urgente realizar una reforma integral a esta figura, mediante una discusión amplia en el Congreso de la República.

ÁMBITO JURÍDICO: En su opinión, ¿la figura de la tercerización ha sido satanizada?

Jorge Eliécer Manrique: Pareciera que se sufre de trastorno bipolar, porque trasegamos entre la permisividad absoluta, diría cómplice, frente al tema de la tercerización laboral, y una postura que pretende prohibir, casi socavando la libertad y forma de organización legítima de la empresa, la adopción de los procesos que se denominan en la doctrina italiana como la desconcentración productiva o la adquisición indirecta del trabajo y la tercerización (al menos en una de las varias acepciones de la palabra).

En otros términos, para referirse a la tercerización, antes de satanizarla o alabarla, deben plantearse las discusiones en un orden coherente. Oscilar entre estos dos picos extremos, permitir o prohibir, parece muy preocupante y denota un claro desconocimiento de la figura en un contexto global.

Á. J.: ¿Cree que las cooperativas de trabajo asociado (CTA) ya encontraron su lugar en el ámbito laboral colombiano?

J. E. M.: Pensaría que no, por diversas razones. En primer lugar, la regulación



sobre las CTA, especialmente la dispuesta en el Decreto 2025 del 2011, no contempló un adecuado tratamiento frente a todos los supuestos de hecho relacionados con el trabajo asociativo o autogestionario. En segundo lugar, hay otros cuerpos normativos mediante los cuales, simplemente cambiando el *nomen iuris*, se soslaya el sistema de tutela recogido en lo que puede denominarse el Derecho Laboral tradicional.

En relación con las CTA, de un lado, se exacerbó la figura y se colocó en el mismo nivel a quienes hacían trabajo cooperativo serio (los minoritarios) con aquellos que abusaron de las características y bondades del cooperativismo (los mayoritarios), de las ventajas que otorgaba el ordenamiento y de la actividad laboral que se ejecutaba

en las CTA.

Á. J.: ¿De qué manera se evita que la tercerización laboral se convierta en precarización del trabajo?

J. E. M.: Cuando el proceso de tercerización es legal y necesario, no se podría estar en la hipótesis de la precarización del trabajo. La tercerización ilegal debe ser combatida con una alta dosis de inspección, vigilancia y control por parte del Estado, a través de sus órganos competentes; naturalmente, la actividad del juez del trabajo es trascendental a la hora de imponer condenas en casos de precarización del trabajo mediante la tercerización laboral ilegal.

Á. J.: Se está planteando una nueva reforma laboral, tendiente a revivir algunas prebendas suprimidas por la Ley 789 del 2002. ¿Qué opina sobre dicha propuesta?

J. E. M.: Me parece importante y conveniente que se pueda modificar el ordenamiento jurídico laboral y ser traído a la situación anterior a la reforma que introdujo la Ley 789 del 2002. Creo que existe un compromiso expreso sobre este punto, y se prestaría un gran servicio a la clase trabajadora, retornando a los valores que contemplaba el Código Sustantivo del Trabajo antes de la Ley 789, es decir, se volvería a la vigencia plena de la Ley 50

de 1990. Debe advertirse que en el juego democrático y en el tránsito de las reformas en el Congreso, se pueden aprovechar estos momentos para hacer ajustes que exige el mundo del trabajo en otros temas igualmente importantes, como, por ejemplo, la reglamentación por vía de ley del denominado fuero de la salud.

Á. J.: ¿Cómo se conjuga la generación de empleo con la expedición de normas?

J. E. M.: El empleo no se crea por decreto o por ley, el verdadero empleo se crea cuando las condiciones económicas del país indican que se están moviendo hacia arriba los indicadores económicos, fiscales y sociales, antes no. Lo demás es generar falsas expectativas en la sociedad, lo que produce un efecto en el largo plazo de insatisfacción generalizada.

INFORMACIÓN

ambitojuridico.com

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA

"El empleo no se crea por decreto o por ley".

Lo nuevo en

LABORAL

» Corte explica allanamiento a la mora en pago de aportes de independientes

Las EPS no pueden transferirle al afiliado las consecuencias de su falta de diligencia, pues vulnerarían los principios de continuidad en la prestación del servicio y buena fe en los que se basa la teoría del allanamiento a la mora. Con este argumento, la Corte Constitucional le ordenó a una EPS reconocer, liquidar y pagar las incapacidades expedidas a favor de un trabajador independiente.

(C. Const., Sent. T-643, sep. 4/14, M. P. Martha Victoria Sánchez)

ADMINISTRATIVO

» Concertación, idónea para fomentar negociación colectiva de empleados públicos

El Consejo de Estado negó la nulidad del Decreto 535 del 2009, que estableció las instancias para concertar las condiciones laborales de los empleados públicos. Según indicó, la OIT ha admitido cierta flexibilidad en la garantía de la negociación colectiva de estos trabajadores.

(C. E., Secc. Segunda, Sent. 12802009, ago. 21/14, C. P. Gerardo Arenas)

» Responsabilidad del empleador ante levantamiento de suspensión de funciones

El hecho de que el trabajador suspendido en cumplimiento de una orden judicial no haya prestado el servicio durante la vigencia de tal determinación no exime a la administración del deber de reintegrarlo y cancelarle los salarios dejados de percibir, cuando haya sido absuelto, advirtió el Consejo de Estado.

(C. E., Secc. Segunda, Sent. 18792012, mayo 12/14, C. P. Gustavo E. Gómez)

CIVIL

» Precisan requisitos para homologar capitulaciones estipuladas en el extranjero

Para acreditar en Colombia la validez de las capitulaciones matrimoniales originadas en idioma extranjero y otorgadas en el exterior, se requiere de la traducción del Ministerio de Relaciones Exteriores por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez, conforme al artículo 251 del Código General del Proceso, precisó la Supernotariado.

(Supernotariado, Cpto. 1507, mayo 26/14)

Estas novedades las podrá encontrar en las publicaciones actualizables de LEGIS.

Jorge Eliécer Manrique Villanueva

Estudios realizados: abogado y doctor en Derecho de la Universidad Externado. Tiene un máster en Disciplina del trabajo, sindical y de la seguridad social (Universita Tor Vergata Roma Due) y especializaciones en Seguridad Social, Derecho de los Negocios y Derecho del Trabajo.

Cargos desempeñados: investigador, consultor privado y conjuer de las salas laborales de los tribunales superiores de los distritos judiciales de Bogotá y Cundinamarca.

Ocupación actual: profesor titular y Director del Departamento de Derecho Laboral en la Universidad Externado de Colombia y asesor laboral.

Demandas de inconstitucionalidad

Requisito de procedibilidad en materia electoral

El numeral 6° del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/11) reguló el requisito de procedibilidad para ejercer la acción electoral. En opinión de la accionante, ese tema debió ser objeto de una ley estatutaria y no ordinaria.

Para la ciudadana, los asuntos procedimentales en dichos eventos también están cobijados por esa reserva, especialmente porque inciden de forma directa en el proceso electoral y sus resultados.

Adicionalmente, la disposición demandada no se limitó a reproducir el parágrafo del artículo 237 de la Carta Política, que rige el mismo requisito, sino que excedió lo dispuesto por el constituyente, afirmó.

(Exp. 10465. Demandante: Marcela Useche)

Ingresos corrientes y transferencias

La demanda se dirige contra las expresiones "ingresos corrientes" y "las transferencias" contenidas en el artículo 64 y el numeral 1° del artículo 71 de la Ley 1617 del 2013, por desconocer, supuestamente, la autonomía administrativa y financiera de los distritos.

Al destinar a las localidades el 10 % de los recursos que componen los ingresos corrientes, como lo ordenan tales disposiciones, los alcaldes no pueden asegurar totalmente el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, indica el escrito.

Además, los apartes acusados disponen de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, para conformar el presupuesto anual de los fondos de desarrollo local, lo que vulnera preceptos constitucionales, concluye.

(Exp. 10452. Demandante: Raúl de Jesús Lugo Hernández)

Sociedad patrimonial entre compañeros permanentes

Por la supuesta violación de los artículos 5, 13 y 42 de la Constitución Política, fueron demandados algunos apartes de los literales a) y b) del artículo 2° de la Ley 54 de 1990, modificados por el artículo 1° de la Ley 979 del 2005, que exigen dos años de preexistencia de la unión marital de hecho, para que se presuma la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes.

De acuerdo con los demandantes, las expresiones acusadas violan los derechos a la igualdad y a la conformación de una familia. En su opinión, se genera una discriminación injustificada, pues esa exigencia no es requerida en el contrato de matrimonio, donde los efectos patrimoniales surgen a partir de su celebración.

(Exp. 10462. Demandantes: Patricio Martínez Ferrada y Edna Liliana Molano López)